

SEÑOR JUEZ ADMINISTRATIVO DE IBAGUE (REPARTO)
CIUDAD

JHON HANNER BRAVO PERDOMO, mayor de edad, domiciliado y residenciado en Ibagué, Tolima, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi respectiva firma, mediante poder especial, amplio y suficiente obrando como apoderado de la señora **OLGA GIRALDO DE RAMIREZ BENEFICIARIA PENSIONADA DEL EXTINTO SS® DIOMEDES RAMIREZ ARCILA CON CC No. 4.313.483**, mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad, en ejercicio del artículo 138 del C.P.A.C.A me permito presentar ante ese despacho, ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONTRA **LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL**, representada por su Director General, BRIGADIER GENERAL ® JORGE ALIRIO BARON LEGUIZAMON, o quien haga sus veces, con citación y audiencia del Señor Procurador General de la Nación, o quien haga sus veces y ante ese Juzgado se decrete a favor de mi poderdante las siguientes:

DECLARACIONES Y CONDENAS.

LO QUE SE DEMANDA.

PRIMERO. Que es nulo el oficio No **26223 / OAJ DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014** firmado por el representante legal de la respectiva Caja, o a quien este designó; mediante el cual se da contestación al oficio con número y fecha de radicación **20066 DEL 17/07/2014**, negando el reajuste y la reliquidación de la asignación de retiro; y el pago de los dineros retroactivos, resultantes de la diferencia económica entre lo pagado y dejado de pagar, con su respectiva indexación, que en derecho corresponde a mi poderdante, en virtud a los aumentos decretados por el Gobierno Nacional (IPC) por los años 1997, 1999, 2002, 2004 y 2005 ajustes que se hicieron por debajo de la inflación y de los cuales se puede hablar de prescripción de mesadas, pero no de prescripción del derecho al reajuste¹; así mismo que se paguen las diferencias resultantes de efectuar el mencionado ajuste a partir de la ocurrencia de la no prescripción de las mesadas, la cual se interrumpió con la interposición de la petición y hasta cuando se profiera sentencia a favor, en la forma y termino del presente libelo.

SEGUNDO. Como consecuencia de la declaración de nulidad del acto administrativo citado, se condene a la Caja de sueldos de Retiro a:

REAJUSTAR la asignación de retiro, teniendo como referente para ello el Índice de Precios al Consumidor, los porcentajes que debió aumentar año a año y las sumas de dinero que debió pagar en cada uno de ellos, a partir de 1997 y en los años posteriores en que existió la afectación y no las que efectivamente pago, hasta la instancia que ponga fin al presente litigio.

TERCERO. Que de conformidad con el reajuste se ordene:

- **INCORPORAR** en la asignación de retiro de mi poderdante, el resultado de la suma de los porcentajes que dejo de pagar la Caja, tomando en cuenta el valor que para el año en que se profiera sentencia definitiva debería estar recibiendo de conformidad con el I.P.C.

¹ Consejo de Estado, Sección Segunda, Consejero Ponente: JAIME MORENO GARCIA, expediente: 25000232500020030815201 interno (8464-05), aclaración de sentencia, actor: JOSE JAIME TIRADO CASTAÑEDA. trece (13) de septiembre de dos mil siete (2007).

CUARTO. Como consecuencia del reajuste e incorporación de los nuevos valores en la asignación de retiro de mi poderdante, se ordene:

- **LIQUIDAR Y PAGAR** los valores que resulten de la operación matemática de lo pagado y lo dejado de pagar por parte de la Caja, y que tengan ocurrencia a partir de la prescripción contada cuatro años anteriores al momento de la petición de reconocimiento del derecho frente a la respectiva Caja (conforme al régimen de prescripción cuatrienal de la fuerza pública), hasta la instancia que ponga fin al presente litigio.

QUINTO. Se ordene a la Caja **DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL**, a realizar la respectiva:

- **INDEXACIÓN** de Los valores resultantes de la liquidación como resultado de la operación matemática de lo pagado y lo dejado de pagar, con referente al Índice de Precios al Consumidor. De conformidad con el Art. 187 inc. 4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

SEXTO. Se ordene a la Caja de sueldos de Retiro de la Policía Nacional, a pagar los respectivos:

- **INTERESES MORATORIOS** a las cantidades liquidas reconocidas a partir de la ejecutoria de la sentencia. De conformidad con él el Art. 192 inc. 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEPTIMO. Que se ordene a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, a dictar:

- **RESOLUCIÓN** para el cumplimiento de la sentencia de conformidad con el Art. 192 inc. 1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

OCTAVO. Condénese a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en costas y agencias de derecho con el Art. 188 del C.P.A.C.A.

HECHOS Y OMISIONES.

La demanda se fundamenta en los siguientes hechos y omisiones, de parte de la entidad accionada.

1.-Mi poderdante prestó sus servicios en la Policía Nacional, en el grado de **SS**, y percibe asignación de retiro en virtud de **La Resolución No.2473 del 23 de SEPTIEMBRE de 1975**, emanada de **LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL**.

2.-Conforme lo ordeno la Ley 238 de 1995, mi poderdante debió recibir el aumento en la asignación de retiro con base en el índice de precios al consumidor, certificado por el DANE, del año inmediatamente anterior, y no como el resultado de la escala salarial porcentual aplicada para los miembros activos de la fuerza pública, conforme al principio de oscilación.

3.- Mi poderdante solicito a **LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL**, el pago de reajuste, reliquidación y cómputo en su asignación de retiro desde el año 1997 hasta la fecha de la petición.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.

CONSTITUCIONALES.

La constitución Política de Colombia, el preámbulo, artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 25, 44, 46, 48 51, 52, 53, inciso 3º. 90, 10 y 220.

LEGALES.

Ley 238 de 1.995²; Ley 100 de 1.993 artículo 279 parágrafo³. Decretos 1211, 1212, 1213 de 1990.

CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.

Existe violación de normas superiores, toda vez que al expedir el decreto 1212 de 1990 el gobierno consideró; como históricamente lo venía haciendo, que el sistema de oscilación era el más favorable para salvaguardar las asignaciones del personal retirado, apreciación ceñida a la realidad en ese momento, y que cumplió su razón de ser hasta tanto cambiaron los patrones de referencia. Posteriormente, con la expedición de la ley 100 de 1993, el personal de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional fue excluido del sistema de seguridad social integral, razón por la cual se expidió la ley 238 de 1995, por medio de la cual se hizo salvedad en cuanto a la interpretación de esa disposición, argumentando que no se trataba de la negación de los beneficios y derechos consagrados para los pensionados de dichos sectores.

A pesar de la claridad de la disposición que habilitó el reajuste de las asignaciones de retiro en función del índice de precios al consumidor, la administración continuó ignorando su alcance, argumentando que no se pueden hacer aumentos superiores a los estipulados porque desbordaría los límites dispuestos por el legislador, lo cual es falso, toda vez que fue el mismo legislador quien al expedir la ley 238 de 1995, cambió las reglas básicas para reajustar las pensiones del personal retirado de la Policía.

El sistema de oscilación consagrado en el artículo 151 del decreto 1212 de 1990, para el reajuste de las asignaciones de retiro o pensiones, es una forma de variación dentro de determinados límites que tiene como referencia el monto de los salarios del personal activo y que es susceptible de modificación por parte del legislador, como ocurrió con la expedición de la ley 238 de 1995, que ordenó una nueva forma de reajuste de las pensiones, tomando como referencia el índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior al reajuste, para evitar que por la utilización de dicho sistema se siguiera envileciendo las asignaciones del personal retirado de la Fuerza Pública.

Por último, si la razón para no dar aplicación a lo dispuesto en la ley 238 de 1995, respecto al reajuste de las asignaciones de retiro, consiste en entender que éstas no son pensiones, basta con observar sentencias de la Corte Constitucional como la C- 890 de 1999 y lo establecido en el decreto 1212 de 1990, para determinar que dicha equivalencia se encuentra establecida y por lo tanto, la aplicación del índice de precios al consumidor al reajustar las asignaciones de retiro es legalmente válida.

² Ley 238 de 1.995. Por la cual se adiciona el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

³ Ley 100 de 1.993, artículo 279.

PARAGRAFO 4º.- Las excepciones consagradas en el presente artículo **no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados** (negrillas y subrayado fuera de texto)

Además, en virtud de lo expresado anteriormente se ha violado el derecho a la igualdad, toda vez que el personal retirado de la Fuerza Pública tiene derecho a que se aplique lo establecido por la ley 238 de 1995, como ocurre con los demás pensionados.

Al respeto la Corte Constitucional, expresa en la sentencia C-815/99⁴ la exequibilidad condicionada del art. 8 de la ley 278/96, que regula lo relativo a la fijación del salario mínimo, y que es aplicable también al presente caso. Posteriormente, en sentencia T-276/97⁵ sostuvo que la remuneración es inalienable y que su ajuste debe estar conforme a la Ley y no a un aparente cumplimiento de la misma, y que las escalas salariales deben tener un comportamiento acorde con el costo de vida

PETICION.

Con mi debido y acostumbrado respeto, ruego al señor Juez Administrativo, se acceda a las súplicas de la demanda como se ha invocado en esta acción, ordenando y condenando a la caja de Sueldos de Retiro a reajustar y computar en la asignación de retiro de mi poderdante desde el año 1997 y para los siguientes años en que haya existido la afectación, con base en el Índice de precios al consumidor (I.P.C), así como el pago de las mesadas teniendo en cuenta la diferencia entre lo pagado y dejado de pagar y los incrementos de reajuste que se debe hacer año por año hasta la fecha que ponga fin al presente proceso, para que de esta manera la mesada pensional de mi prohijado adquiera nuevamente el valor real al factor inflacionario de la moneda Colombiana, teniendo en cuenta que son prestaciones periódicas de pago y tracto sucesivo.

LINEA JURISPRUDENCIAL

DOCTRINA DEL PRECEDENTE JUDICIAL EN COLOMBIA.

A partir de la Constitución de 1.991, la doctrina y la jurisprudencia colombiana ha dado un giro de ciento ochenta grados sobre el factor vinculante del

⁴ (...) en todo caso el reajuste salarial que decreta nunca podrá ser inferior al porcentaje del IPC del año que expira. Y ello por cuanto, como el Ministerio Público lo dice, el Gobierno está obligado a velar porque el salario mantenga su poder adquisitivo, de tal forma que garantice el mínimo vital y móvil a los trabajadores y a quienes de ellos dependen. De lo contrario, vulnera el artículo 53 de la Constitución". (Subraya la Corte).

⁵ (...) "En lo que hace a la remuneración y a su periódico reajuste, se trata de dos elementos que conforman, desde el punto de vista constitucional, derechos inalienables de todo trabajador, que correlativamente implican obligaciones ineludibles de los empleadores. Estos no asumen una conducta legítima dentro de la relación laboral cuando pretenden escamotear tales derechos mediante procedimientos destinados a crear situaciones aparentemente ajustadas a la ley pero en realidad violatorias de ella,...".

"La posición del empresario en este sentido no puede ser aceptada por la Corte, frente a los derechos constitucionales alegados, por cuanto si bien es cierto en el nivel mínimo se cumple la obligación legal incrementando el salario en la proporción anual plasmada en el respectivo decreto, ello no quiere decir que las demás escalas salariales puedan permanecer indefinidamente congeladas, según la voluntad del patrono, ya que la remuneración de los trabajadores debe ser móvil, es decir, está llamada a evolucionar proporcionalmente, de acuerdo con el aumento en el costo de la vida".

"En otros términos, ningún patrono público ni privado tiene autorización constitucional para establecer que sólo hará incrementos salariales en el nivel mínimo y que dejará de hacerlos indefinidamente en los distintos períodos anuales cuando se trata de trabajadores que devengan más del salario mínimo".

"En realidad, en una economía inflacionaria, la progresiva pérdida del poder adquisitivo de la moneda causa necesariamente la disminución real en los ingresos de los trabajadores en la medida en que, año por año, permanezcan inmodificados sus salarios. Cada período que transcurre sin aumento implica una disminución real de la remuneración y, por tanto, un enriquecimiento sin causa de parte del patrono, quien recibe a cambio la misma cantidad y calidad de trabajo, pagando cada vez menos".

precedente judicial, la Corte Constitucional ha buscado extender la teoría al manejo jurisprudencial que hacen las otras jurisdicciones en Colombia.

Para este efecto se ha legislado en sentencias de la Corte suprema de justicia y del consejo de estado, para que estas corporaciones le den mayor fuerza gravitacional a sus propios fallos mediante una reconstrucción muy detallada del concepto de doctrina probable.

La principal consecuencia de esta doctrina probable, radica en que los jueces cualquiera que sea jurisdicción de origen, no pueden hacer cambios libres de su jurisprudencia ya establecida, sin violar principios constitucionales fundamentales, de hacerlo se estaría vulnerando el principal derecho constitucional esbozado en el artículo 13.

DESARROLLO DE LA LINEA JURISPRUDENCIAL EN EL PRESENTE CASO.

Con todo respeto honorable Juez, trayendo a colación el tema en relación con la línea jurisprudencial, me permito ilustrar el precedente vinculante que existe en la jurisprudencia Colombiana, sobre el problema jurídico planteado en la demanda; en contra de la entidad accionada y la negativa de está a pagar las mesadas y a reajustar las asignaciones de retiro o pensiones tomando como base el índice de precios al consumidor (I.P.C).

Para este respeto existen los siguientes planteamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado⁶, en sentencia que se ha convertido en referente del tema que se plantea en esta ocasión y en la cual se hacen las siguientes apreciaciones:

"2. La Ley 100 de 1993 en su artículo 279 excluyó de su aplicación al siguiente grupo de servidores del Estado:

- a) Miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
- b) (...)

Por consiguiente, no existe la menor duda en el sentido que bajo los mandatos del articulo original 279 de la Ley 100 de 1993 los pensionados de las fuerzas militares y de la Policía Nacional no era acreedores del reajuste de sus pensiones como lo dispone el artículo 14 de aquella, vale decir, teniendo en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, sino como lo disponía el Decreto 1212 de 1990, o sea mediante la oscilación de las asignaciones de retiro de los miembros de la Policía Nacional en actividad.

Pero la Ley 238 de 1995, adicionó el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, con el siguiente:

"PARAGRAFO 4º.- Las excepciones consagradas en el presente artículo **no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los**

⁶ Consejo de Estado, Sección Segunda, Consejero Ponente: JAIME MORENO GARCIA, expediente: 25000232500020030815201 interno (8464-05), actor: JOSE JAIME TIRADO CASTAÑEDA. Diecisiete (17) de mayo de dos mil siete (2007).

-Consejo de Estado, Sección Segunda, Consejero Ponente: ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO, expediente: interno (7983-05), Seis (06) de diciembre de dos mil siete (2007).

pensionados de los sectores aquí contemplados”(Negrillas y subrayado fuera de texto)

Lo cual quiere significar que a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995, el grupo de pensionados de los sectores excluidos de la aplicación de la Ley 100 de 1993, sí tiene derecho a que se les reajuste sus pensiones teniendo en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE como lo dispuso el artículo 14 de la última, y a la mesada 14 en los términos del artículo 142 ibidem. (Negrillas y subrayado fuera de texto)

(...)

Para comenzar no se trataría simplemente de la “interpretación” de la Ley 238 de 1995, sino de su aplicación, porque le creó a partir de su vigencia el derecho al grupo de pensionados de los sectores arriba relacionados, entre ellos a los pensionados de la fuerza pública, el derecho al reajuste de sus pensiones de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor y a la mesada 14. (Negrillas y subrayado fuera de texto)

Ahora bien, el despacho solo podría dejar de aplicar una Ley ordinaria posterior, especial y más favorable, según se verá más adelante, en lugar de una Ley marco anterior y su Decreto 1212 de 1990 que la desarrolla, bajo la condición de que aquella fuera incompatible con la Constitución Política, debido a que esa es la única hipótesis constitucional para dejar de aplicar una Ley que no ha sido declarada inexecutable. (Negrillas y subrayado fuera de texto)

También es pertinente para el caso que nos ocupa traer a colación que el anterior precedente ha sido ratificado por otros pronunciamientos de Honorable Consejo de Estado, que además contiene una aclaración de voto⁷ conjunta presentada por el Consejero Ponente y el Dr. JESUS MARIA LEMUS BUSTAMANTE, el cual se pronuncia en los siguientes términos:

“En el caso específico, las normas contenidas en la Ley 100 de 1993 (sic) regulan lo referente al sistema de actualización de las pensiones, bajo el nuevo sistema de seguridad social, del que expresamente excluyó el legislador a los miembros de la fuerza pública. Sin embargo, el legislador ordinario, a través de la Ley 238 de 1995, artículo 1º permitió que las pensiones de la fuerza pública fuera actualizadas conforme al artículo 14, ibídem, es decir, conforme al IPC, y no por el de oscilación, propio del sistema especial de las fuerzas militares.

(...)

Si lo que se pretendía era aplicar al caso la Ley 238 de 1995, debió decirse expresamente que se aplicaba el régimen del IPC porque el legislador, que era el competente para modificarlo, así lo dispuso, independientemente de que no lo hubiese hecho al regular el régimen especial.

⁷ Consejo de Estado, Sección Segunda, Consejero Ponente: ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO, expediente: interno (7983-05), aclaración de voto, Seis (06) de diciembre de dos mil siete (2007).

Es así que el amparo al presente derecho presenta una línea jurisprudencial, como factor vinculante, emanada de la Corte constitucional⁸, Consejo de Estado⁹, Tribunales Administrativos¹⁰ y diferentes Juzgados de la jurisdicción¹¹, cuando enuncian en sus pronunciamientos que la forma de corregir la inflación monetaria de las asignaciones de retiro o pensiones debe hacerse conforme y respetando el índice de precios al consumidor certificado por el DANE, al año inmediatamente anterior, y que no es la simple aplicación del principio de favorabilidad, sino, que se ha configurado la inaplicación de la Ley 238 de 1995, por parte de la entidad accionada, lo que significa que es estrictamente por legalidad, por así establecerlo el legislador, que es el competente para modificar cualquier régimen en particular¹².

⁸ - Corte Constitucional, Sala Plena, Magistrado Ponente: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL, Sentencia C-1433, actor: Rosalba Inés Jaramillo Murillo y Orlando Muñoz Neira, veintitrés (23) de octubre de dos mil (2000).

- Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Sentencia T-418 actor: Betty Florez Naranjo, NUEVE (9) de septiembre mil novecientos noventa y seis (1996).

- Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, Sentencia C-815, actor: Inés Jaramillo Murillo, veinte (20) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).

- Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL, Sentencia C-432, actor: Rubiela Barrera de Muñoz, seis (6) de mayo de dos mil cuatro (2004).

⁹ Consejo de Estado, Sección Segunda, Consejero Ponente: JAIME MORENO GARCIA, expediente: 25000232500020030815201 interno (8464-05), actor: JOSE JAIME TIRADO CASTAÑEDA. Diecisiete (17) de mayo de dos mil siete (2007).

-Consejo de Estado, Sección Segunda, Consejero Ponente: ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO, expediente: interno (7983-05), Seis (06) de diciembre de dos mil siete (2007).

¹⁰ TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA:

-EXPEDIENTE 2004-5708 Diciembre 1 de 2005, accionante PEDRO PABLO RODRIGUEZ GUTIERREZ, demandado Caja de Sueldos de Retiro de la policía.

-EXPEDIENTE 2003-7667 17 de Noviembre de 2005, accionante BG. ®. FELIX GALLARDO ANGARITA, demandado Caja de Sueldos de Retiro de la policía.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA:

- Magistrado Ponente: BELISARIO BELTRAN BASTIDAS, expediente: 73001333100120070000901 interno (0571-2008), actor: ALFREDO VERGARA GUTIERREZ. Veintitrés (23) de enero de dos mil nueve (2009).

- Magistrado Ponente: JORGE ALFONSO GUTIERREZ MUÑOZ, expediente: 73001333100120070005401 interno (0626-2008), actor: GUILLERMO BARRIOS. Dos (02) de febrero de dos mil nueve (2009).

¹¹ JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL TOLIMA:

- Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué, Juez: LUIS OMIR CORRALES TRUJILLO, expediente: 73001333100820070009100, actor: OTONIEL MOSCOSO. Dieciocho (18) de diciembre de dos mil ocho (2008).

- Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué, Juez: CESAR AUGUSTO DELGADO RAMOS, expediente: 73001333100620070026800, actor: CIRO CASTRO ROMERO. VEINTISIETE (27) de marzo de dos mil ocho (2008).

- Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué, Juez: MIGUEL ANGEL AGUIAR DELGADILLO, expediente: 73001333100420070001800, actor: ANGELA ELICENIA CESPEDES DE MENDOZA. Veinticinco (25) de marzo de dos mil nueve (2009).

¹² Tribunal Administrativo Del Tolima, Magistrado Ponente: BELISARIO BELTRAN BASTIDAS, expediente: 73001333100120070003601 interno (0594-2008), actor: ISIDRO CRUZ ROJAS. Veinte (20) de febrero de dos mil nueve (2009).

PRESCRIPCION

La prescripción es un fenómeno que corresponde al derecho sustantivo, cuyo efecto consiste en dejar al sujeto sin posibilidad de ejercitar un derecho. Sin embargo, **TRATÁNDOSE DE PRESTACIONES PERIÓDICAS OPERA SÓLO RESPECTO DE LAS MESADAS QUE SE CAUSEN FUERA DEL TÉRMINO, PERO NO DEL DERECHO MISMO, TODA VEZ QUE ÉSTE ES IMPRESCRIPTIBLE.**

Además de lo anotado en el párrafo anterior, para el caso que nos ocupa tenemos que el Honorable Consejo de Estado¹³, en reciente fallo ha dilucidado lo correspondiente a la aplicación de la prescripción de la siguiente forma:

"De otra parte, la sala no comparte la posición de la caja en cuanto a que la prescripción declarada sea trienal y no cuatrienal como lo dispuso la sentencia apelada, por las siguientes razones:

El actor reclama en la demanda el reajuste de su asignación por los años comprendidos entre 1995 y 2007. **Para el inicio de dichas anualidades la norma vigente en materia de términos de prescripción era el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, el cual estableció un periodo de cuatro años contados a partir de la fecha en que se hizo exigible el derecho.** (Subrayas y negrilla es mía)

(...)

Para la sala es claro que, **en principio, las normas no tienen efectos retroactivos, es decir que su eficacia en el tiempo opera hacia el futuro,** salvo que en ellas mismas se disponga su aplicabilidad sobre hechos acaecidos con anterioridad a su puesta en vigencia.

Nótese que de la norma transcrita (art. 43 Dec. 4433/04), **el ejecutivo no se refirió a la prescripción de las asignaciones de retiro o pensiones causadas con anterioridad a su vigencia; circunstancia que permite afirmar que la prescripción trienal solo es aplicable a los derechos prestacionales que se causen a partir del año 2004.**

Con el mismo propósito, la sala precisa que conforme **al artículo 41 de la Ley 153 de 1887, " la prescripción iniciada bajo el imperio de una Ley, y que no se hubiere completado aún el tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera..."** regla aplicable al presente asunto, pues para la época en que se expidió el Decreto 4433 de 2004, los ajustes correspondientes al año 2002 en adelante no habían prescrito, en razón de que el actor interrumpió su prescripción el 19 de diciembre de 2006."

PROCEDIMIENTO A SEGUIR

El procedimiento a seguir para esta acción es el proceso ordinario contencioso contenido en los Arts. 179, 180, 181, 182, 183, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

¹³ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subseccion "B", Consejero Ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE, expediente: 25000232500020070066901 interno (2166-08), actor: JAIME HERNANDEZ LOPEZ, diecinueve (19) de febrero de dos mil nueve (2009).

COMPETENCIA Y ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA.

Es competente ese Juzgado Administrativo para conocer en primera instancia esta acción, en razón a que el actor presentó su último servicio personal **EN BOGOTÁ**.

La cuantía la estimo en **TRECE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS (\$13.351.211)**, liquidada hasta el mes de DICIEMBRE de 2008, liquidada hasta el mes de DICIEMBRE de 2012, , todo lo anterior de acuerdo al C.P.A.C.A. en su art. 155 Núm. 2.

LIQUIDACION I.P.C

AÑO	TOTAL DEVENGADO SIN IPC	% IPC	REAJUSTE	14 MESADAS
1999	\$ 822.920,44	6,2013	\$ 51.031,77	\$ 714.445
2000	\$ 898.877,00	6,2013	\$ 55.742,06	\$ 780.389
2001	\$ 979.775,00	6,2013	\$ 60.758,79	\$ 850.623
2002	\$ 1.038.562,00	6,2013	\$ 64.404,35	\$ 901.661
2003	\$ 1.111.266,00	6,2013	\$ 68.912,94	\$ 964.781
2004	\$ 1.183.387,00	6,2013	\$ 73.385,38	\$ 1.027.395
2005	\$ 1.248.471,00	6,2013	\$ 77.421,43	\$ 1.083.900
2006	\$ 1.310.894,00	6,2013	\$ 81.292,47	\$ 1.138.095
2007	\$ 1.369.885,00	6,2013	\$ 84.950,68	\$ 1.189.309
2008	\$ 1.447.833,00	6,2013	\$ 89.784,47	\$ 1.256.983
2009	\$ 1.558.882,00	6,2013	\$ 96.670,95	\$ 1.353.393
2010	\$ 1.590.058,00	6,2013	\$ 98.604,27	\$ 1.380.460
2011	\$ 1.640.465,00	6,2013	\$ 101.730,16	\$ 1.424.222
			TOTAL	\$ 13.351.211

MEDIOS DE PRUEBA

DOCUMENTALES

Solicito al señor Juez, se sirva tener como medios de prueba los siguientes documentos auténticos que aporsto al proceso:

1. Acto Administrativo acusado, es decir, del oficio **26223 / OAJ DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014**, expedido por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. Actos en firme y ejecutoriados, por no haberse ejercido ningún recurso ordinario contra él, con lo cual se agotó la Vía Gubernativa.
- 2.-Copia del Radicado **20066 DE 17/07/2014** donde se solicitó la reliquidación, reajuste y cómputo de la asignación de retiro por el I. P. C

ANEXOS

1. Poder legalmente conferido por mi representado.
2. Los documentos enunciados en el acápite de pruebas.
3. Copias de la demanda, con sus respectivos anexos para el archivo del Juzgado, los traslados de ley incluyendo al Agente del Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
5. Copia de la demanda en CD.

NOTIFICACIONES

1. Al Procurador delegado, en su respectiva oficina.
2. Al Director de la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL, carrera 7 No. 13 -52.** Bogotá D. C. Correo electrónico:judiciales@casur.gov.co
3. A la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la Calle 70 No 4-60 en Bogotá D. C. Tel:2558955 Extensión 406-407- y 409 email: procesos@defensajuridica.gov.co
4. Al demandante en carrera 3 No 22- 01 Oficina 102 ciudad de Ibagué - Tolima.
5. Al suscrito apoderado en la ciudad de Ibagué, Tolima, Carrera 3 No. 22- 01 Oficina 102, celular: 3132439241 Tel: 2614061, correo electrónico:germanlemagomez@hotmail.com

Atentamente,

JHON HANNER BRAVO PERDOMO
CC. No 1.110.479.221 de Ibagué, Tolima
T.P. No. 242.253del C. S. de la J.